Bogotá, D.C., julio de 2021

DOCTORA:

OLGA YASMÍN CRUZ ROJAS

JUEZ PRIMERO (1º) DE FAMILIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ, D.C.

E.

S.

D.

REFERENCIA: **2020-0337 (J.O. 24 DE FLIA DE BTÁ)**

DE: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS
KAREN JOHANNA PRIETO ALAPE

NIÑO: IAN ALEJANDRO PÉREZ PRIETO

CONTRA: JHOJANS ALEXÁNDER PÉREZ OSTOS

ASUNTO: INTERPOSICIÓN Y SUSTENTACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN
SUBSIDIO APELACIÓN

LUCY ESTRELLA DEL PILAR PÉREZ LEÓN, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de DEFENSORA PÚBLICA de la Defensoría del Pueblo, actuando como abogada de pobre de la parte demandante, estando dentro del término de ejecutoria, conforme a los artículos 318 y s.s, y 446 del Código General del Proceso, interpongo y sustento RECURSO DE REPOSICIÓN y en subsidio de APELACIÓN, contra el auto de fecha **ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021)**, notificado en el estado No. 42 del día nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021), mediante el cual se altera de oficio y se modifica la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante.

PETICIÓN ESPECIAL DE APLICACIÓN DE MEDIDA PROVISIONAL A FAVOR DEL NIÑO IAN ALEJANDRO PÉREZ PRIETO

Tal y como lo he solicitado en memoriales de fecha 4 de junio y 6 de julio de 2021, con fundamento en los artículos 42 y 44 constitucional, todas los pactos y convenios que hacen parte del bloque de constitucionalidad en lo relacionado con el derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, el artículo 129 de la Ley de Infancia y Adolescencia, respetuosamente me dirijo a Usted, con el fin de que le sea dado y se dé la orden de pago a favor de su progenitora y representante legal la señora KAREN JOHANNA PRIETO ALAPE de los títulos judiciales que existen a favor del menor de edad citado, por lo menos hasta el monto de lo ordenado en el mandamiento de pago, como medida provisional en aras de protegerle sus derechos fundamentales y mientras llega el momento procesal de aprobación de la liquidación del crédito. Nótese además que la parte ejecutante, también tiene reconocido el **amparo de pobreza** y es beneficiaria del Servicio Nacional de Defensoría Pública por imposibilidad económica.

Lo anterior en aras de la protección integral e interés superior de los derechos del precitado niño, en especial el de alimentos que están en conexión con su mínimo vital. Además desde su nacimiento a la fecha, ha sido su progenitora quien, la mayor parte del tiempo, ha respondido económicamente por el citado menor de edad.

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD:

PRIMERO: La liquidación del crédito presentada por la suscrita desde el día 15 de febrero de 2021 ante el Juzgado 24 de Familia de esta ciudad, fue fijada para su traslado el día 4 de junio de 2021 por su Despacho. Mediante auto de cúmplase de fecha dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021) se ordenó a Secretaria, dada la constancia secretarial y los inconvenientes ocurridos en el micro sitio los días 8 y 9 de junio del presente año, a fin de garantizar el derecho de defensa de los extremos procesal reanudar el término suspendido ante el ingreso erróneo del expediente al Despacho.

Una vez revisados los traslados en el micrositio, no observo que se haya fijado en lista, por el término ordenado y faltante, la liquidación del crédito en el proceso de la referencia, para cumplir tal orden.

Y debió haber sido así, en cumplimiento del debido proceso y la orden dada por Su Señoría, además todos los extremos procesales, debía saber, en cuál fijación en lista y el día que tenía, para de ser el caso, la parte ejecutada presentara la debida objeción y no procederse como se hizo a ingresarlo al Despacho y proferirse el auto impugnado.

SEGUNDO: El auto de fecha 8 de julio hace un análisis e interpretación de los títulos base de la ejecución con un criterio, en donde no se tiene cuenta que los derechos de niños, niñas y adolescentes son prevalentes y tanto la sociedad, la familia como el Estado, debemos todos juntos velar, con fundamento en los artículos 42 y 44 constitucional, todas los pactos y convenios que hacen parte del bloque de constitucionalidad, en especial, en este tipo de procesos ejecutivos, en todo lo relacionado con su derecho de alimentos. Y en lo que respecta al Acuerdo Privado de fecha 3 de febrero de 2020, además de lo anterior, tener en cuenta que en estos casos sirven de guía para su interpretación y aplicación, la Constitución Política, todo el Bloque de Constitucionalidad, en especial la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, las demás leyes y la jurisprudencia referente a la materia, al enfoque y perspectiva de género.

Y me explico, conforme al Acta de *Audiencia de Conciliación Fracasada de Custodia, fijación de cuota alimentaria y visitas* realizada el día veintinueve (29) de enero de dos mil diecinueve (2019) dentro de la *HSF 11M No. 1233917027-2018 SIM:146104324* el Defensor de Familia Jorge Enrique Romero Caita del Centro Zonal Suba de la Regional Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) fijó una cuota alimentaria integral a favor de IAN ALEJANDRO PÉREZ PRIETO NUIP 1.233.917.027 a cargo de su progenitor el señor JHOJANS ALEXÁNDER PÉREZ OSTOS identificado con cédula de ciudadanía No. 1.233.897.518 por la suma correspondiente al **VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de UN -1- SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE** al

momento de ser exigible la obligación, los cuales deberá cancelar del 1 al 5 de cada mes a partir de FEBRERO, a través de consignación bancaria a nombre de la progenitora y se fijaron tres -3- mudas de ropa completas al años en los meses de marzo, fecha de cumpleaños -27 de octubre- y en el mes de diciembre por un valor de DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS (\$207.000) cada una.

El día 3 de febrero de 2020 los progenitores del niño IAN ALEJANDRO PÉREZ PRIETO realizan un acuerdo privado de forma escrita que denominan "Acercamiento por inasistencia alimentaria" donde literalmente expresan: "***Se llega al acuerdo de que el señor Jhojans Pérez con c.c. 1233891518 dará una cuota quincenal por valor de \$150.000 para cubrir la cuota mensual y abono a la deuda. Yo Karen Prieto con cc 1000239872 estoy de acuerdo con lo estipulado en esta constancia. Esto se cumplirá –sic- a partir de la fecha***" Firman ambos progenitores.

Al analizar el contexto se observa que el deudor alimentaria no quiso llegar a un acuerdo respecto al tema de alimentos de su menor de edad hijo IAN ALEJANDRO PÉREZ PRIETO, razón por la cual el Defensor de Familia en uso de sus facultades legales y para protegerle sus derechos debió establecer una cuota provisional a favor de aquél.

Pese a lo anterior, persiste el incumplimiento por parte del progenitor del menor. La progenitora del menor instaura querrela por el Delito de Inasistencia Alimentaria. En búsqueda de una solución consensuada entre las partes, se llega a un acuerdo privado y extraprocesal entre los progenitores del citado menor de edad, que además de no ser muy claro, carecer de técnica, nuevamente es incumplido por el deudor alimentario.

Infaustamente, dicho acuerdo privado, al ser interpretado por el Despacho, junto con el otro título ejecutivo (acto administrativo mediante el cual el Defensor de Familia fija la cuota alimentaria y de vestuario), al momento de liquidar el crédito, termina beneficiando al progenitor y no velando por la protección integral e interés superior del niño lo cual se ve reflejado en la modificación oficiosa del crédito, pero en detrimento de sus derechos.

a) Y me explico, tomemos el tema de **CUOTAS DE VESTUARIO**, para el Despacho, al no fijar el Defensor de Familia en su decisión, su monto de reajuste, se debe entender ha de realizarse conforme al artículo 129 del Código de Infancia y Adolescencia que debe aplicarse el I.P.C..

Ello no se prestaría a ninguna duda ni necesitaría de interpretación alguna, si en el mismo acto administrativo donde se fija vestuario, la cuota alimentaria que estableció el Defensor de Familia corresponde al "25% de un -1- salario mínimo legal mensual vigente, que para el año 2019 equivalía a \$207.029.

No por coincidencia, insisto, en el mismo acto administrativo dicho funcionario del I.C.B.F, fija por concepto vestuario 3 cuotas al año (marzo, 27 de octubre y diciembre), por \$207.000.

Así como el Despacho interpreta que no se pactó fórmula de reajuste y debe aplicar el I.P.C., perfectamente puede deducir y llegar a una conclusión diferente, por ejemplo que su reajuste debía serlo conforme al incremento del salario mínimo, dado que así es el reajuste de la cuota alimentaria, además, que fijó como cuota de vestuario similar cifra, a la que estableció para dicho año, por cuota alimentaria y que se trata de un mismo acto administrativo proferido por el Defensor de Familia del Centro Zonal de Suba de la Regional Bogotá del I.C.B.F..

Es que aquí, uno de los títulos ejecutivos, no se basa precisamente en la voluntad de las partes, fue una medida que en uso de sus facultades tuvo que fijar el Defensor de Familia a favor de un menor de edad, ante el no acuerdo de sus progenitores en el tema de alimentos y custodia y cuidado personal.

Además no debe dejarse del lado, que el progenitor del menor de edad, voluntariamente no ha querido aportar a alimentos a su hijo. Que hay una querrela por inasistencia alimentaria y que la única forma en que se ha logrado que cumpla, lo fue, por una orden judicial de medidas cautelares, dada en el presente proceso ejecutivo.

Que la demandante y representante legal del niño ha ido por Fiscalía, Centro Zonal de I.C.B.F., Defensoría del Pueblo y Rama Judicial, buscando la protección y ayuda del Estado, en defensa de los derechos de su menor de edad hijo, para que el padre de su hijo sea responsable con sus deberes como padre, en especial, con su obligación alimentaria.

Entonces qué hacer, lo que siempre debe realizarse cuando estamos ante derechos de niños, niñas y adolescentes, aplicar el principio *pro infants*. El Despacho, al hacer su interpretación aplica el IPC, trayendo consigo que la cuota de vestuario tiene una fórmula diferente de reajuste a la de alimentos provisionales fijada en un mismo acto administrativo y título ejecutivo y termino siendo menor su valor con el paso del tiempo.

¿A quién favorece con dicha interpretación?, ¿cuál de ambas interpretaciones posibles favorecería al menor?. La respuesta es más que evidente al mirar las cifras. Además dejó sentado el criterio de interpretación para las futuras actualizaciones del crédito respecto a la fórmula de reajuste de vestuario.

b) Y ocurre algo similar pero más ilógico, y es con la interpretación del **ACUERDO PRIVADO** del 3 de febrero de 2020, nuevamente conculcador de los derechos del niño IAN ALEJANDRO PÉREZ PRIETO, no solo a nivel de esta liquidación del crédito, sino de lo que sucederá a futuro de aplicarse el raso y muy singular criterio con el que lo analiza e interpreta.

Para el juzgado la cuota acordada en el precitado acuerdo privado, que incluye la cuota alimentaria fijada por el Defensor de Familia y el abono a una deuda anterior de alimentos, NO SE REAJUSTA, ni por el salario mínimo ni por el IPC, se queda inmóvil en el tiempo, fija por los años que sean y que alcancen, en TRESCIENTOS MIL PESOS (\$300.000), nada importa que pierda poder adquisitivo la misma y que año tras año, el abono a la deuda anterior sea menor.

Mucho menos, que llegará, con toda seguridad, un día en que el 25% de un salario mínimo supere los \$300.000, y en el evento de no haberse cancelado la totalidad de los alimentos debidos al 3 de febrero de 2020, quién sabe cómo podrá cobrarse el saldo faltante por los mismos.

No niego que lo pactado carece de mucha técnica, que desafortunadamente la progenitora del menor, como suele suceder con este tipo de acuerdos, con la esperanza de que cumpliera el progenitor resultó perjudicando a su menor de edad hijo .

Y en sede judicial, su interpretación, no puede ser, como se hizo aquí, favoreciendo al incumplido y renuente deudor alimentario, no al niño y de paso obviando el principio *pro infans*, pues conforme se modifica y aprueba la liquidación del crédito, la cuota alimentaria pactada en el acuerdo privado de \$300.000, permanece inmóvil desde el 3 de febrero de 2020, con el inexorable efecto, que cada año, pierde poder adquisitivo y que el deudor alimentario abona menos a la deuda anterior.

Es así como para el año 2020 de abonó a la deuda anterior fue \$80.549.50 mensuales. En el presente 2021 es de \$72.868.50, el próximo año será menor y así sucesivamente irá disminuyendo el abono a deuda, dada la singular interpretación hecha, hasta que llegue el día que la cuota del 25% de un salario mínimo que fijó el Defensor de Familia, supere esta cifra y no haya saldo para aplicar a la deuda anterior.

En pocas palabras, con la interpretación hecha por el Despacho, el deudor alimentario, en virtud del acuerdo privado desde el 3 de febrero de 2020, tiene una nueva cuota alimentaria (que incluye cuota alimentaria y deuda anterior) inmóvil y sin reajuste de \$300.000, por los años que alcance, y la parte de abono a deuda anterior y que se comprometió a pagar mensualmente año con año disminuye, hasta el momento que la cuota alimentaria que fijó el Defensor de Familia supere los \$300.000, momento en cual, si para infortunio del menor, no se ha cancelado aún la deuda debida al momento del acuerdo, quién sabe qué pasará.

Insisto, aquí no estamos interpretando un pacto ni acreedor cualquiera, estamos hablando de un menor de edad y de su derecho de alimentos. Pues así como lo interpreta el Juzgado, es evidente que el único beneficiado es el deudor alimentario y progenitor del menor, quien, tristemente, no se ha caracterizado por el cumplimiento de sus deberes como padre, en especial, el de amor, cuidado, protección y de alimentos hacia IAN ALEJANDRO PÉREZ PRIETO.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que en el presente caso hay un menor de edad y una mujer cabeza de familia que suscribe un acuerdo privado, además del principio *pro infants* debe interpretarlo en contexto, con visión y perspectiva de género.

Por todo lo expuesto, la modificación oficiosa del crédito que el Juzgado realiza, deberá revocarse y verse reflejada en la parte y valores correspondientes, tanto la interpretación del reajuste anual del vestuario, así como en los criterios de interpretación del acuerdo privado de fecha 3 de febrero de 2021 incluyendo una fórmula de reajuste que impida que la nueva cuota pactada el día 3 de febrero de 2021, pierda poder adquisitivo e igualmente que el abono a deuda anterior, año con año sea menor, en aras de la protección integral e interés superior de éste.

ACLARACIÓN FINAL RELACIONADA CON LAS AGENCIAS DE DERECHOS INCLUIDAS EN LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS

En cuanto al tema de las costas, que fueron fijadas en auto de fecha 15 de octubre donde se incluyen la suma de \$250.000 como agencias en derecho y aprobadas por auto de fecha 25 de marzo de 2021, que la parte demandante es beneficiaria del Servicio Nacional de Defensoría Pública, en consecuencia, no me es muy claro, si dicha suma de dinero deberá pagarla el ejecutado a órdenes de la *DEFENSORÍA DEL PUEBLO*, entidad estatal que es quien nos cancela los honorarios a los Defensores Públicos contratados mediante contrato de prestación de servicios, o están a favor de la parte demandante. Aclaro, que este tema en una capacitación salió a colación, sin que nos diesen una respuesta clara. Pero que considero es muy importante y debe tenerse en cuenta, pues repito, es el Estado quien le ha brindado a la parte demandante de forma gratuita, dada su imposibilidad económica, la defensa técnica y representación legal judicial a la parte activa de la litis.

Conforme a lo expuesto, de acuerdo a su leal saber y entender, con toda la deferencia del caso solicito se proceda conforme a derecho en todo lo relacionado y para todos los fines pertinentes.

De la Señora Juez,

LUCY ESTRELLA DEL PILAR PÉREZ LEÓN

C.C. NO. 52'851.792 DE BOGOTÁ

T.P. NO. 131307 DEL C. S. DE LA J.

E MAIL: asejuridicaspl@yahoo.com ledppl@yahoo.com lucperez@defensoria.edu.co

TELÉFONO: 310- 797 30 87

RE: J. 1 E.F. Proceso No. 2020-337 (J.O. 24 de Flia) Interposición y sustentación Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación auto que altera de oficio y se modifica la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante de fecha 8 de julio...

citasymemorialesejefam01 <citasymemorialesejefam01@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 14/07/2021 17:03

Para: ASESORIAS JURÍDICAS LUCY PEREZ <asejuridicaspl@yahoo.com>

ACUSO RECIBIDO

Cordial Saludo

*El correo remitido por usted se agregará al expediente ejecutivo de alimentos número **11001311002420200033700**, se le impartirá el trámite correspondiente.*

Los ESTADOS, traslados, entradas al Despacho y avisos emitidos, por este Despacho se publicarán en la página web de la Rama Judicial, (www.ramajudicial.gov.co); así mismo, con el fin de evitar congestión se solicita enviar los memoriales únicamente al correo citasymemorialesejefam01@cendoj.ramajudicial.gov.co, con el fin de brindar una pronta gestión; tenga en cuenta que al enviar sus memoriales o solicitudes debe especificar número del proceso, Juzgado de origen y partes.

Cordialmente.

Laura Viviana Babativa Cortes

Asistente Administrativo grado 5

Oficina de Apoyo en Asuntos de Familia de Ejecución de Bogotá

De: ASESORIAS JURÍDICAS LUCY PEREZ <asejuridicaspl@yahoo.com>

Enviado: miércoles, 14 de julio de 2021 15:27

Para: citasymemorialesejefam01 <citasymemorialesejefam01@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 01 Ejecucion Asuntos Familia Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j01ejfbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; johanp808@gmail.com <johanp808@gmail.com>

Asunto: J. 1 E.F. Proceso No. 2020-337 (J.O. 24 de Flia) Interposición y sustentación Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación auto que altera de oficio y se modifica la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante de fecha 8 de julio de ...

Bogotá, D.C., julio de 2021

Doctora:

Olga Yasmín Cruz Rojas

JUEZ PRIMERO (1º) DE FAMILIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ, D.C.

E.

S.

D.

Referencia: **2020-0337** (J.O. 24 de Flia de btá)
 Proceso Ejecutivo de Alimentos
 De: KAREN JOHANNA PRIETO ALAPE
 Niño: IAN ALEJANDRO PÉREZ PRIETO
 Contra: JHOJANS ALEXÁNDER PÉREZ OSTOS
 Asunto: Interposición y sustentación Recurso de
 Reposición y en subsidio Apelación

LUCY ESTRELLA DEL PILAR PÉREZ LEÓN, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de Defensora Pública de la Defensoría del Pueblo, actuando como abogada de pobre de la parte demandante, estando dentro del término de ejecutoria, conforme a los artículos 318 y s.s, y 446 del Código General del Proceso, interpongo y sustento RECURSO DE REPOSICIÓN y en subsidio de APELACIÓN, contra el auto de fecha **ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021)**, notificado en el estado No. 42 del día nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021), mediante el cual se altera de oficio y se modifica la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante.

**PETICIÓN ESPECIAL DE APLICACIÓN DE MEDIDA PROVISIONAL A FAVOR DEL NIÑO IAN
ALEJANDRO PÉREZ PRIETO**

Tal y como lo he solicitado en memoriales de fecha 4 de junio y 6 de julio de 2021, con fundamento en los artículos 42 y 44 constitucional, todas los pactos y convenios que hacen parte del bloque de constitucionalidad en lo relacionado con el derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, el artículo 129 de la Ley de Infancia y Adolescencia, respetuosamente me dirijo a Usted, con el fin de que le sea dado y se dé la orden de pago a favor de su progenitora y representante legal la señora KAREN JOHANNA PRIETO ALAPE de los títulos judiciales que existen a favor del menor de edad citado, por lo menos hasta el monto de lo ordenado en el mandamiento de pago, como medida provisional en aras de protegerle sus derechos fundamentales y mientras llega el momento procesal de aprobación de la liquidación del crédito. Nótese además que la parte ejecutante, también tiene reconocido el amparo de pobreza y es beneficiaria del Servicio Nacional de Defensoría Pública por imposibilidad económica.

Lo anterior en aras de la protección integral e interés superior de los derechos del precitado niño, en especial el de alimentos que están en conexión con su mínimo vital. Además desde su nacimiento a la fecha, ha sido su progenitora quien, la mayor parte del tiempo, ha respondido económicamente por el citado menor de edad.

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD:

PRIMERO: La liquidación del crédito presentada por la suscrita desde el día 15 de febrero de 2021 ante el Juzgado 24 de Familia de esta ciudad, fue fijada para su traslado el día 4 de junio de 2021 por su Despacho. Mediante auto de cúmplase de fecha dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021) se ordenó a Secretaria, dada la constancia secretarial y los inconvenientes ocurridos en el micro sitio los días 8 y 9 de junio del presente año, a fin de garantizar el derecho de defensa de los extremos procesal reanudar el término suspendido ante el ingreso erróneo del expediente al Despacho.

Una vez revisados los traslados en el micrositio, no observo que se haya fijado en lista, por el término ordenado y faltante, la liquidación del crédito en el proceso de la referencia, para cumplir tal orden.

Y debió haber sido así, en cumplimiento del debido proceso y la orden dada por Su Señoría, además todos los extremos procesales, debía saber, en cuál fijación en lista y el día que tenía, para de

ser el caso, la parte ejecutada presentara la debida objeción y no procederse como se hizo a ingresarlo al Despacho y proferirse el auto impugnado.

SEGUNDO: El auto de fecha 8 de julio hace un análisis e interpretación de los títulos base de la ejecución con un criterio, en donde no se tiene cuenta que los derechos de niños, niñas y adolescentes son prevalentes y tanto la sociedad, la familia como el Estado, debemos todos juntos velar, con fundamento en los artículos 42 y 44 constitucional, todas los pactos y convenios que hacen parte del bloque de constitucionalidad, en especial, en este tipo de procesos ejecutivos, en todo lo relacionado con su derecho de alimentos. Y en lo que respecta al Acuerdo Privado de fecha 3 de febrero de 2020, además de lo anterior, tener en cuenta que en estos casos sirven de guía para su interpretación y aplicación, la Constitución Política, todo el Bloque de Constitucionalidad, en especial la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, las demás leyes y la jurisprudencia referente a la materia, al enfoque y perspectiva de género.

Y me explico, conforme al Acta de *Audiencia de Conciliación Fracasada de Custodia, fijación de cuota alimentaria y visitas* realizada el día veintinueve (29) de enero de dos mil diecinueve (2019) dentro de la *HSF 11M No. 1233917027-2018 SIM:146104324* el Defensor de Familia Jorge Enrique Romero Caita del Centro Zonal Suba de la Regional Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) fijó una cuota alimentaria integral a favor de IAN ALEJANDRO PÉREZ PRIETO NUIP 1.233.917.027 a cargo de su progenitor el señor JHOJANS ALEXÁNDER PÉREZ OSTOS identificado con cédula de ciudadanía No. 1.233.897.518 por la suma correspondiente al **VEINTICINCO POR CIENTO (25%)** de **UN -1- SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE** al momento de ser exigible la obligación, los cuales deberá cancelar del 1 al 5 de cada mes a partir de FEBRERO, a través de consignación bancaria a nombre de la progenitora y se fijaron tres -3- mudas de ropa completas al años en los meses de marzo, fecha de cumpleaños -27 de octubre- y en el mes de diciembre por un valor de DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS (\$207.000) cada una.

El día 3 de febrero de 2020 los progenitores del niño IAN ALEJANDRO PÉREZ PRIETO realizan un acuerdo privado de forma escrita que denominan "*Acercamiento por inasistencia alimentaria*" donde literalmente expresan: "***Se llega al acuerdo de que el señor Jhojans Pérez con c.c. 1233891518 dará una cuota quincenal por valor de \$150.000 para cubrir la cuota mensual y abono a la deuda. Yo Karen Prieto con cc 1000239872 estoy de acuerdo con lo estipulado en esta constancia. Esto se cumplira – sic- a partir de la fecha***" Firman ambos progenitores.

Al analizar el contexto se observa que el deudor alimentaria no quiso llegar a un acuerdo respecto al tema de alimentos de su menor de edad hijo IAN ALEJANDRO PÉREZ PRIETO, razón por la cual el Defensor de Familia en uso de sus facultades legales y para protegerle sus derechos debió establecer una cuota provisional a favor de aquél.

Pese a lo anterior, persiste el incumplimiento por parte del progenitor del menor. La progenitora del menor instaura querrela por el Delito de Inasistencia Alimentaria. En búsqueda de una solución consensuada entre las partes, se llega a un acuerdo privado y extraprocesal entre los progenitores del citado menor de edad, que además de no ser muy claro, carecer de técnica, nuevamente es incumplido por el deudor alimentario.

Infaustamente, dicho acuerdo privado, al ser interpretado por el Despacho, junto con el otro título ejecutivo (acto administrativo mediante el cual el Defensor de Familia fija la cuota alimentaria y de vestuario), al momento de liquidar el crédito, termina beneficiando al progenitor y no velando por la protección integral e interés superior del niño lo cual se ve reflejado en la modificación oficiosa del crédito, pero en detrimento de sus derechos.

a) Y me explico, tomemos el tema de **CUOTAS DE VESTUARIO**, para el Despacho, al no fijar el Defensor de Familia en su decisión, su monto de reajuste, se debe entender ha de realizarse conforme

al artículo 129 del Código de Infancia y Adolescencia que debe aplicarse el I.P.C..

Ello no se prestaría a ninguna duda ni necesitaría de interpretación alguna, si en el mismo acto administrativo donde se fija vestuario, la cuota alimentaria que estableció el Defensor de Familia corresponde al "25% de un -1- salario mínimo legal mensual vigente, que para el año 2019 equivalía a \$207.029.

No por coincidencia, insisto, en el mismo acto administrativo dicho funcionario del I.C.B.F, fija por concepto vestuario 3 cuotas al año (marzo, 27 de octubre y diciembre), por \$207.000.

Así como el Despacho interpreta que no se pactó formula de reajuste y debe aplicar el I.P.C., perfectamente puede deducir y llegar a una conclusión diferente, por ejemplo que su reajuste debía serlo conforme al incremento del salario mínimo, dado que así es el reajuste de la cuota alimentaria, además, que fijó como cuota de vestuario similar cifra, a la que estableció para dicho año, por cuota alimentaria y que se trata de un mismo acto administrativo proferido por el Defensor de Familia del Centro Zonal de Suba de la Regional Bogotá del I.C.B.F..

Es que aquí, uno de los títulos ejecutivos, no se basa precisamente en la voluntad de las partes, fue una medida que en uso de sus facultades tuvo que fijar el Defensor de Familia a favor de un menor de edad, ante el no acuerdo de sus progenitores en el tema de alimentos y custodia y cuidado personal.

Además no debe dejarse del lado, que el progenitor del menor de edad, voluntariamente no ha querido aportar a alimentos a su hijo. Que hay una querrela por inasistencia alimentaria y que la única forma en que se ha logrado que cumpla, lo fue, por una orden judicial de medidas cautelares, dada en el presente proceso ejecutivo.

Que la demandante y representante legal del niño ha ido por Fiscalía, Centro Zonal de I.C.B.F., Defensoría del Pueblo y Rama Judicial, buscando la protección y ayuda del Estado, en defensa de los derechos de su menor de edad hijo, para que el padre de su hijo sea responsable con sus deberes como padre, en especial, con su obligación alimentaria.

Entonces qué hacer, lo que siempre debe realizarse cuando estamos ante derechos de niños, niñas y adolescentes, aplicar el principio *pro infants*. El Despacho, al hacer su interpretación aplica el IPC, trayendo consigo que la cuota de vestuario tiene una formula diferente de reajuste a la de alimentos provisionales fijada en un mismo acto administrativo y título ejecutivo y termino siendo menor su valor con el paso del tiempo.

¿A quién favorece con dicha interpretación?, ¿cuál de ambas interpretaciones posibles favorecía al menor?. La respuesta es más que evidente al mirar las cifras. Además dejó sentado el criterio de interpretación para las futuras actualizaciones del crédito respecto a la fórmula de reajuste de vestuario.

b) Y ocurre algo similar pero más ilógico, y es con la interpretación del **acuerdo privado** del 3 de febrero de 2020, nuevamente conculcador de los derechos del niño IAN ALEJANDRO PÉREZ PRIETO, no solo a nivel de esta liquidación del crédito, sino de lo que sucederá a futuro de aplicarse el raso y muy singular criterio con el que lo analiza e interpreta.

Para el juzgado la cuota acordada en el precitado acuerdo privado, que incluye la cuota alimentaria fijada por el Defensor de Familia y el abono a una deuda anterior de alimentos, NO SE REAJUSTA, ni por el salario mínimo ni por el IPC, se queda inmóvil en el tiempo, fija por los años que

sean y que alcancen, en TRESCIENTOS MIL PESOS (\$300.000), nada importa que pierda poder adquisitivo la misma y que año tras año, el abono a la deuda anterior sea menor.

Mucho menos, que llegará, con toda seguridad, un día en que el 25% de un salario mínimo supere los \$300.000, y en el evento de no haberse cancelado la totalidad de los alimentos debidos al 3 de febrero de 2020, quién sabe cómo podrá cobrarse el saldo faltante por los mismos.

No niego que lo pactado carece de mucha técnica, que desafortunadamente la progenitora del menor, como suele suceder con este tipo de acuerdos, con la esperanza de que cumpliera el progenitor resultó perjudicando a su menor de edad hijo .

Y en sede judicial, su interpretación, no puede ser, como se hizo aquí, favoreciendo al incumplido y renuente deudor alimentario, no al niño y de paso obviando el principio *pro infans*, pues conforme se modifica y aprueba la liquidación del crédito, la cuota alimentaria pactada en el acuerdo privado de \$300.000, permanece inmóvil desde el 3 de febrero de 2020, con el inexorable efecto, que cada año, pierde poder adquisitivo y que el deudor alimentario abona menos a la deuda anterior.

Es así como para el año 2020 de abonó a la deuda anterior fue \$80.549.50 mensuales. En el presente 2021 es de \$72.868.50, el próximo año será menor y así sucesivamente irá disminuyendo el abono a deuda, dada la singular interpretación hecha, hasta que llegue el día que la cuota del 25% de un salario mínimo que fijó el Defensor de Familia, supere esta cifra y no haya saldo para aplicar a la deuda anterior.

En pocas palabras, con la interpretación hecha por el Despacho, el deudor alimentario, en virtud del acuerdo privado desde el 3 de febrero de 2020, tiene una nueva cuota alimentaria (que incluye cuota alimentaria y deuda anterior) inmóvil y sin reajuste de \$300.000, por los años que alcance, y la parte de abono a deuda anterior y que se comprometió a pagar mensualmente año con año disminuye, hasta el momento que la cuota alimentaria que fijó el Defensor de Familia supere los \$300.000, momento en cual, si para infortunio del menor, no se ha cancelado aún la deuda debida al momento del acuerdo, quién sabe qué pasará.

Insisto, aquí no estamos interpretando un pacto ni acreedor cualquiera, estamos hablando de un menor de edad y de su derecho de alimentos. Pues así como lo interpreta el Juzgado, es evidente que el único beneficiado es el deudor alimentario y progenitor del menor, quien, tristemente, no se ha caracterizado por el cumplimiento de sus deberes como padre, en especial, el de amor, cuidado, protección y de alimentos hacia IAN ALEJANDRO PÉREZ PRIETO.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que en el presente caso hay un menor de edad y una mujer cabeza de familia que suscribe un acuerdo privado, además del principio *pro infants* debe interpretarlo en contexto, con visión y perspectiva de género.

Por todo lo expuesto, la modificación oficiosa del crédito que el Juzgado realiza, deberá revocarse y verse reflejada en la parte y valores correspondientes, tanto la interpretación del reajuste anual del vestuario, así como en los criterios de interpretación del acuerdo privado de fecha 3 de febrero de 2021 incluyendo una fórmula de reajuste que impida que la nueva cuota pactada el día 3 de febrero de 2021, pierda poder adquisitivo e igualmente que el abono a deuda anterior, año con año sea menor, en aras de la protección integral e interés superior de éste.

ACLARACIÓN FINAL RELACIONADA CON LAS AGENCIAS DE DERECHOS INCLUIDAS EN LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS

En cuanto al tema de las costas, que fueren fijadas en auto de fecha 15 de octubre donde se incluyen la suma de \$250.000 como agencias en derecho y aprobadas por auto de fecha 25 de marzo de 2021, que la parte demandante es beneficiaria del Servicio Nacional de Defensoría Pública, en consecuencia, no me es muy claro, si dicha suma de dinero deberá pagarla el ejecutado a órdenes de la *DEFENSORÍA DEL PUEBLO*, entidad estatal que es quien nos cancela los honorarios a los Defensores Públicos contratados mediante contrato de prestación de servicios, o están a favor de la parte demandante. Aclaro, que este tema en una capacitación salió a colación, sin que nos diesen una respuesta clara. Pero que considero es muy importante y debe tenerse en cuenta, pues repito, es el Estado quien le ha brindado a la parte demandante de forma gratuita, dada su imposibilidad económica, la defensa técnica y representación legal judicial a la parte activa de la litis.

Conforme a lo expuesto, de acuerdo a su leal saber y entender, con toda la deferencia del caso solicito se proceda conforme a derecho en todo lo relacionado y para todos los fines pertinentes.

De la Señora Juez,

Lucy Estrella del Pilar Pérez León

C.C. No. 52'851.792 de Bogotá

T.P. No. 131307 del C. S. de la J.

E mail: asejuridicaspl@yahoo.com ledppl@yahoo.com lucperez@defensoria.edu.co

Teléfono: 310- 797 30 87